



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XV LEGISLATURA

Serie B:

PROPOSICIONES DE LEY

12 de diciembre de 2025

Núm. 295-1

Pág. 1

PROPOSICIÓN DE LEY

122/000246 Proposición de Ley sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Presentada por el Grupo Parlamentario Republicano.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(122) Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso.

Autor: Grupo Parlamentario Republicano

Proposición de Ley sobre la modificación urgente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y notificar al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, **Fernando Galindo Elola-Olaso**.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia de las Diputadas Pilar Vallugera Balaña y Teresa Jordà Roura, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición de Ley sobre la modificación urgente de la Ley orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para su debate en el Pleno.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2025.—**Teresa Jordà i Roura y Pilar Vallugera Balaña**, Diputadas.—**Gabriel Rufián Romero**, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.

PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA MODIFICACIÓN URGENTE DE LA LEY
ORGÁNICA 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA

Exposición de motivos

En abril de 2012, el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), culminando el endurecimiento del marco fiscal del Estado a partir de una estricta regla de gasto y de la obligación de destinar todo superávit presupuestario de los ayuntamientos a reducir la deuda pública. Esta ley siguió el camino marcado por la reforma constitucional de 2011, pactada y ratificada por los dos principales partidos del Estado en tan solo un mes.

Las reglas fiscales establecidas por la Ley de 2012 se enmarcaban en una receta de recuperación de la crisis financiera de 2008 común a toda la Unión Europea. Una receta basada en la imposición de medidas de austeridad y de devaluación interna a partir de la reducción del gasto público, la congelación de salarios o el aumento del tipo impositivo del IVA. La Unión Europea llevó a cabo una intensa reforma legislativa entre 2011 y 2013 para institucionalizar estas medidas, que a su vez constituyeron los pilares de los rescates canalizados a través del FMI y los distintos predecesores del Mecanismo Europeo de Estabilidad. De esos rescates, el del sistema bancario español ha costado a los contribuyentes del Estado unos 70.000 millones de euros, según cálculos del Tribunal de Cuentas.

El impacto de estas políticas se hizo visible rápidamente a partir de los recortes en servicios públicos, el aumento del paro y la desigualdad y el estancamiento macroeconómico. De hecho, la investigación económica ha relacionado las medidas de austeridad con la crisis del Euro y la lenta recuperación económica posterior. Incluso el propio FMI reconoció que las medidas expansivas implementadas por Alemania o Austria fueron más beneficiosas que los programas de austeridad.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuso un paradigma de rigidez fiscal a los ayuntamientos que ha ahogado sus finanzas. Pese a ser las administraciones más saneadas del Estado, se les limitó enormemente la capacidad de gasto impidiendo utilizar los superávits para servicios o inversiones locales. Mientras la ciudadanía necesitaba servicios públicos urgentes para dar respuesta a una dura crisis económica, los ayuntamientos acumulaban un superávit del 0,44 % en 2015 del que no podían hacer uso. Este marco fiscal era especialmente contradictorio para los ayuntamientos sin deuda pública, casi la mitad de todos los del Estado ese año. Siguiendo esta tendencia, en 2024, el 66,2 % del total de ayuntamientos del Estado no presentan deuda pública.

A esto se suma la infrafinanciación persistente a Comunidades Autónomas y ayuntamientos, que sufren las consecuencias de modelos injustos y caducados, que pesan negativamente sobre las haciendas de estas administraciones. Este contexto afecta directamente a la realidad de los ciudadanos, teniendo en cuenta que las CCAA y ayuntamientos realizaron conjuntamente el 42 % del gasto público en la década de 2010 a 2019, especialmente en ámbitos clave como la enseñanza, la vivienda, la sanidad o los servicios sociales. La falta de financiación se ve claramente en el ámbito de la vivienda, donde el déficit fiscal de Cataluña y el ahogamiento de administraciones locales impide construir y ejercer el derecho de tanteo y retracto de forma ambiciosa.

En definitiva, los efectos lesivos del marco fiscal estatal se ven agravados por un sistema de financiación basado en el centralismo que acapara recursos y centrifuga obligaciones. Un estado que hace muy complicada la acción diaria de los municipios.

Desde entonces, la Unión Europea ha introducido una reforma parcial en el marco fiscal que incorpora algunas de las lecciones aprendidas. Los planes de estabilidad y convergencia anuales se han sustituido por planes plurianuales de gasto neto con un único indicador, adaptados a la realidad de cada estado miembro, y se han establecido condiciones más realistas antes de que se abran procedimientos de déficit excesivos.

Pese al nuevo marco fiscal europeo, el Estado mantiene el régimen derivado de la LOEPSF de 2012. Han pasado trece años, siete de ellos con un gobierno de coalición progresista cuyos miembros no apoyaron la reforma de 2012. Y no se ha reformado ninguno de los aspectos más lesivos para los ayuntamientos: la obligación de destinar los superávits a la reducción de la deuda, la grave penalización por incumplimiento de la regla de gasto o la imposición de objetivos de déficit que benefician a la Administración General del Estado.

Esta proposición de ley introduce varios cambios en el marco establecido por la LOEPSF con el objetivo primordial de asegurar una financiación digna para los ayuntamientos, que les dote de libertad para invertir sus ahorros y les permita planificar mejor sus inversiones y prioridades presupuestarias.

El artículo primero deroga la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), que limitó la autonomía local con independencia de la situación patrimonial de cada ayuntamiento y reduce las competencias autonómicas en regímenes locales. Esta derogación se complementa con una disposición adicional en la LOEPSF que asegure la suficiencia financiera de los ayuntamientos.

El artículo segundo modifica varios apartados de la LOEPSF. En primer término, se reforma el artículo 11 para permitir que los ayuntamientos puedan incurrir en situaciones de déficit en caso de emergencias. El artículo 12 se modifica para actualizar la norma de gasto en el nuevo marco fiscal europeo, tal y como han pedido organismos como la AIReF. Así, se excluyen a los ayuntamientos sostenibles desde el punto de vista financiero y comercial del cumplimiento de esta regla, previendo un grado de flexibilidad en el segundo criterio para acomodar situaciones de municipios con grandes variaciones estacionales de ingresos. En el apartado 12.2 se dota de carácter plurianual a la contabilidad de la formación bruta de capital, mientras que en el quinto apartado se exceptúa a los ayuntamientos saneados de dedicar íntegramente los superávits a la reducción de la deuda pública. En este sentido, el nuevo apartado 12.6 permite explícitamente a las administraciones locales con remanentes de tesorería positivos ejecutar gasto por encima de la regla definida en este artículo.

Los cambios en el artículo 13 responden a la necesidad de repartir el límite de 60 por ciento de deuda marcada por el marco fiscal comunitario de forma equitativa entre el Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos según el gasto público que efectúen. Éste es el camino que habría que seguir también al fijar los objetivos de déficit, para asegurar los servicios públicos de calidad que la ciudadanía se merece. En consonancia con el nuevo artículo 12.5, la propuesta para el nuevo artículo 14 excluye a los ayuntamientos sostenibles financieramente de la prioridad absoluta del pago de la deuda pública por delante de cualquier otro gasto. Se subsana también el artículo 32 y se elimina la disposición adicional sexta de forma coherente con este cambio. Las modificaciones de los artículos 15 y 16 corrigen un elemento clave para una justa distribución de los objetivos de déficit entre las diferentes administraciones. La nueva redacción requiere al gobierno someter estos objetivos a la aprobación de los representantes de Comunidades Autónomas y ayuntamientos, para evitar una centrifugación de la responsabilidad fiscal solo a estas administraciones.

Por último, se crea un nuevo artículo 24 bis para atender una necesidad urgente que constituye la principal preocupación de la ciudadanía: el acceso a la vivienda. El artículo propuesto exime de medidas correctivas por el incumplimiento de las reglas fiscales a los ayuntamientos que justifiquen que la desviación se debe a la inversión en vivienda pública, con el objetivo de acercar el parque público de vivienda del Estado a niveles equiparables con la media de estados miembros de la Unión Europea.

Artículo primero.

Se deroga la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL).

Artículo segundo.

Se modifica la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

1. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 11, que quedan redactados tal y como sigue:

«3. Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente la situación financiera o su sostenibilidad económica o social. Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo.

A efectos de lo anterior, la recesión económica grave se define de acuerdo con lo dispuesto por la legislación europea. En cualquier caso, será necesaria una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional.

En estos casos, será necesario aprobar un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit estructural, teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.

4. Las corporaciones locales tendrán que mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Con carácter excepcional, podrán incurrir en déficit en aquellos ejercicios en los que hayan tenido lugar emergencias derivadas de catástrofes naturales, emergencias sanitarias o situaciones análogas. Los ayuntamientos tendrán que aprobar un plan de reequilibrio a medio plazo y tendrán que presentar un nivel de endeudamiento inferior al 110 % sobre los ingresos corrientes.»

2. Se modifican los apartados 1, 2, 4 y 5 del artículo 12, que quedan redactados tal y como sigue:

«1. La variación del gasto neto de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia del crecimiento basada en la sostenibilidad de la deuda de la economía española. El cumplimiento con esta tasa de referencia se medirá de forma plurianual, en línea con los planes de gasto neto acordados con las instituciones europeas.

Esta regla no será de aplicación a las corporaciones locales que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria, entendida como el mantenimiento de una posición de superávit o equilibrio presupuestario; y sostenibilidad financiera, entendida como el mantenimiento de un nivel de endeudamiento inferior al 110 % de los recursos corrientes y el mantenimiento de un plazo de pago medio a proveedores a definir reglamentariamente, que reconozca la estacionalidad de ingresos según el tipo de municipio y contemple un mecanismo de alerta progresivo.

Cuando exista una desviación anual de la regla de gasto superior al 0,3 % del PIB anual o del 0,6 % de forma acumulada, el crecimiento del gasto neto se ajustará a la senda establecida en los respectivos planes económico-financieros y de reequilibrio previstos en los artículos 21 y 22 de esta ley.

2. Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los usos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras administraciones públicas y las transferencias a las comunidades autónomas y a las corporaciones

locales vinculadas a los sistemas de financiación. El importe de la formación bruta de capital se corregirá con la media de este importe de los últimos cuatro años.

4. Cuando se aprueben cambios normativos que supongan aumentos permanentes de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla en los años en que se obtengan los aumentos de recaudación podrá aumentar en la cuantía equivalente.

Cuando se aprueben cambios normativos que supongan disminuciones de la recaudación, el nivel de gasto computable resultante de la aplicación de la regla los años en que se produzcan disminuciones de la recaudación deberá disminuirse en la cuantía equivalente, excepto en los ejercicios en que haya tenido lugar una situación de emergencia fruto de catástrofes naturales, emergencias sanitarias o situaciones análogas.

5. Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública, excepto en aquellas administraciones que presenten un nivel de endeudamiento por debajo del límite legal.»

3. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 12:

«6. Las Corporaciones Locales que en el ejercicio anterior presenten una situación de equilibrio o superávit presupuestario y a su vez cumplan con los objetivos de sostenibilidad financiera (deuda pública y comercial) y presenten remanente de tesorería positivo podrán efectuar gastos adicionales, por encima del límite de la regla de gasto, quedando el incremento de gasto limitado al propio cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.»

4. Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 13, que quedan redactados tal y como sigue:

«1. El volumen de deuda pública, definido de acuerdo con el Protocolo sobre Procedimiento de déficit excesivo del conjunto de Administraciones Públicas no podrá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado en términos nominales, o el que se establezca por la normativa europea.

Este límite se distribuirá de acuerdo con los siguientes porcentajes, expresados en términos nominales del Producto Interior Bruto nacional: un 34,8 por ciento para la Administración central, un 18,6 por ciento para el conjunto de Comunidades Autónomas y un 6,6 por ciento para el conjunto de Corporaciones Locales. Si, como consecuencia de las obligaciones derivadas de la normativa europea, resultare un límite de deuda distinto al 60 por ciento, su reparto entre Administración central, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales respetará las proporciones anteriormente expuestas.

3. Los límites de deuda pública sólo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 y 11.4 de esta ley.

En estos casos, será necesario aprobar un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia en origen que dio lugar al incumplimiento.»

5. Se modifica el artículo 14, que queda redactado tal y como sigue:

«Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de los gastos de sus presupuestos y no podrán ser objeto de subsanación o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

El pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones Públicas gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto, salvo en los ejercicios en los que haya tenido lugar una situación de emergencia fruto de catástrofes naturales, emergencias sanitarias o situaciones

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 295-1

12 de diciembre de 2025

Pág. 6

análogas. También se exceptuarán aquellas administraciones que cumplan con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.»

6. Se modifica el apartado 1 del artículo 15, que queda redactado tal y como sigue:

«1. El primer semestre de cada año, el Gobierno, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y por la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto a su ámbito, fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria, en términos de capacidad o necesidad de financiación de acuerdo con la definición el objetivo de deuda pública referida a los tres ejercicios siguientes, tanto para el conjunto de Administraciones Públicas como para cada uno de sus subsectores. Estos objetivos estarán expresados en términos porcentuales del Producto Interior Bruto nacional nominal. A efectos de lo anterior, antes del 1 de abril cada año el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y a la Comisión Nacional de Administración Local, donde se debatirán y votarán las respectivas propuestas de objetivos de estabilidad presupuestaria.

El acuerdo del Consejo de Ministros incluirá el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado a que se refiere el artículo 30 de esta ley.»

7. Se modifica el artículo 16, que queda redactado tal y como sigue:

«Aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública en las condiciones establecidas en el artículo 15 de esta Ley, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, formulará propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas.

A partir de la citada propuesta, el Gobierno convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas ya la Comisión Nacional de Administración Local en el plazo improrrogable de quince días para su debate y aprobación.»

8. Se añade un nuevo artículo 24 bis, que queda redactado tal y como sigue:

«Artículo 24 bis. *Exención de las medidas correctivas.*

Se exime de las medidas correctivas establecidas por la presente sección a las entidades locales que acrediten que la superación de los límites de las reglas fiscales deriva de un gasto de inversión en construcción, reforma o adquisición de vivienda pública.»

9. Se modifica el apartado 1 del artículo 32, que queda redactado tal y como sigue:

«1. En el supuesto de que la liquidación presupuestaria se sitúe en superávit, éste importe se destinará, en el caso del Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, a reducir el nivel de endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

Esta disposición no se aplicará a las Corporaciones Locales que presenten un nivel de endeudamiento inferior al límite legal establecido.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 295-1

12 de diciembre de 2025

Pág. 7

10. Se suprime la disposición adicional sexta.
11. Se crea una nueva disposición adicional sexta:

«En un período de seis meses posteriores a la aprobación de esta ley, el Gobierno aprobará un proyecto de ley de mejora del sistema de financiación de las administraciones locales, reformando el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Esta reforma tendrá en cuenta las competencias que los ayuntamientos asumirán como resultado de la derogación de la LRSAL, garantizando la autonomía local y la suficiencia financiera de estas administraciones.»

A la Mesa del Congrés dels Diputats

El Grup Parlamentari Republicà, a instància de les Diputades Pilar Vallugera i Balaña i Teresa Jordà i Roura, a l'empara del que s'estableix en l'article 124 i següents, del vigent Reglament de la Cambra, presenta la següent Proposició de Llei sobre la modificació urgent de la Llei orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera pel seu debat en Ple.

Congrés dels Diputats, a 3 desembre de 2025.—**Teresa Jordà i Roura y Pilar Vallugera i Balaña**, Diputadas GP Republicà.—**Gabriel Rufián Romero**, Portaveu GP Republicà.

PROPOSICIÓ DE LLEI SOBRE LA MODIFICACIÓ URGENT DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2012 D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA

Exposició de motius

L'abril de 2012, el Congrés dels Diputats va aprovar la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), culminant l'enduriment del marc fiscal de l'Estat a partir d'una estricta regla de despesa i de l'obligació de destinar tot superàvit pressupostari dels ajuntaments a reduir el deute públic. Aquesta llei seguia el camí marcat per la reforma constitucional de 2011, pactada i ratificada pels dos principals partits de l'Estat en tan sols un mes.

Les regles fiscals establertes per la Llei de 2012 s'emmarcaven en una recepta de recuperació de la crisi financera de 2008 comuna a tota la Unió Europea. Una recepta basada en la imposició de mesures d'austeritat i de devaluació interna a partir de la reducció de la despesa pública, la congelació de salaris o l'augment del tipus impositiu de l'IVA. La Unió Europea va dur a terme una intensa reforma legislativa entre 2011 i 2013 per institucionalitzar aquestes mesures, que a la vegada van constituir els pilars dels rescats canalitzats a través de l'FMI i els diferents predecessors del Mecanisme Europeu d'Estabilitat. D'aquests rescats, el del sistema bancari espanyol ha costat als contribuents de l'Estat uns 70.000 milions d'euros, segons càlculs del Tribunal de Comptes.

L'impacte d'aquestes polítiques es va fer visible ràpidament a partir de les retallades a serveis públics, l'augment de l'atur i la desigualtat i l'estancament macroeconòmic. De fet, la investigació econòmica ha relacionat les mesures d'austeritat amb la crisi de l'Euro i la lenta recuperació econòmica posterior. Fins i tot el propi FMI ha reconegut que les mesures expansives implementades per Alemanya o Àustria van ser més beneficioses que els programes d'austeritat.

La Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera va imposar un paradigma de rigidesa fiscal als ajuntaments que ha ofegat les seves finances. Malgrat ser les administracions més sanejades de l'Estat, se'ls va limitar enormement la capacitat de despesa impeding utilitzar els superàvits per a serveis o inversions locals. Mentre la ciutadania necessitava serveis públics urgents per donar resposta a una dura crisi econòmica, els ajuntaments acumulaven un superàvit del 0,44 % l'any 2015 del què no podien fer ús. Aquest marc fiscal era especialment contradictori per als ajuntaments sense deute públic, quasi la meitat de tots els de l'Estat aquell any. Seguint aquesta tendència, a 2024, el 66,2 % del total d'ajuntaments de l'Estat no presenten deute públic.

A això se li suma l'infrafinançament persistent a Comunitats Autònomes i ajuntaments, que pateixen les conseqüències de models injustos i caducats, que pesen negativament sobre les hisendes d'aquestes administracions. Aquest context afecta directament la realitat dels ciutadans, tenint en compte que les CCAA i ajuntaments van realitzar conjuntament el 42 % de la despesa pública la dècada de 2010 a 2019, especialment en àmbits clau com l'ensenyament, l'habitatge, la sanitat o els serveis socials. La falta de finançament es veu clarament en l'àmbit de l'habitatge, on el dèficit fiscal de Catalunya i l'ofegament d'administracions locals impedeix construir i exercir el dret de tanteig i retracte de forma ambiciosa.

En definitiva, els efectes lesius del marc fiscal estatal es veuen agreujats per un sistema de finançament basat en el centralisme, que acapara recursos i centrifuga obligacions. Un estat que fa molt complicada l'acció diària dels municipis.

Des de llavors, la Unió Europea ha introduït una reforma parcial al marc fiscal que incorpora algunes de les lliçons apreses. Els plans d'estabilitat i convergència anuals s'han substituït per plans plurianuals de despesa neta amb un únic indicador, adaptats a la realitat de cada estat membre, i s'han establert condicions més realistes abans no s'obrin procediments de dèficit excessius.

Malgrat el nou marc fiscal europeu, l'Estat manté el règim derivat de la LOEPSF de 2012. Han passat tretze anys, set dels quals amb un govern de coalició progressista els membres del qual no van donar suport a la reforma de 2012. I no s'ha reformat cap dels aspectes més lesius per als ajuntaments: l'obligació de destinar els superàvits a la reducció del deute, la greu penalització per incompliment de la regla de despesa o la imposició d'objectius de dèficit que beneficien l'Administració General de l'Estat.

Aquesta proposició de llei introdueix diversos canvis al marc establert per la LOEPSF amb l'objectiu primordial d'assegurar un finançament digne per als ajuntaments, que els doti de llibertat per invertir els seus estalvis i els permeti planificar millor les seves inversions i prioritats pressupostàries.

L'article primer deroga la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), que va limitar l'autonomia local amb independència de la situació patrimonial de cada ajuntament i que ha reduït les competències autonòmiques en règims locals. Aquesta derogació es complementa amb una disposició addicional a la LOEPSF que assegurï la suficiència financera dels ajuntaments.

L'article segon modifica diversos apartats de la LOEPSF. En primer terme, es reforma l'article 11 per permetre que els ajuntaments puguin incórrer en situacions de dèficit en cas d'emergències. L'article 12 es modifica per actualitzar la regla de despesa al nou marc fiscal europeu, tal i com han demanat organismes com l'AIReF. Així, s'exclouen els ajuntaments sostenibles des del punt de vista financer i comercial del compliment d'aquesta regla, preveient un grau de flexibilitat en el segon criteri per acomodar situacions de municipis amb grans variacions estacionals d'ingressos. A l'apartat 12.2 es dota de caràcter plurianual a la comptabilitat de la formació bruta de capital, mentre que al cinquè apartat s'exceptua els ajuntaments sanejats de dedicar íntegrament els superàvits a la reducció del deute públic. En aquest sentit, el nou apartat 12.6 permet explícitament a les administracions locals amb romanents de tresoreria positius executar despesa per sobre de la regla definida en aquest article.

Els canvis a l'article 13 responen a la necessitat de repartir el límit de 60 per cent de deute marcat pel marc fiscal comunitari de forma equitativa entre l'Estat, comunitats autònomes i ajuntaments segons la despesa pública que efectuen. Aquest és el camí que caldria seguir també al fixar els objectius de dèficit, per assegurar els serveis públics de qualitat que la ciutadania es mereix. En coherència amb el nou article 12.5, la proposta per al nou article 14 exclou els ajuntaments sostenibles finançament de la prioritat absoluta del pagament del deute públic per davant de qualsevol altra despesa. S'esmena també l'article 32 i s'elimina la disposició adicional sisena de forma coherent amb aquest canvi. Les modificacions dels articles 15 i 16 corregeixen un element clau per a una distribució justa dels objectius de dèficit entre les diferents administracions. El nou redactat requereix al govern sotmetre aquests objectius a aprovació dels representants de Comunitats Autònomes i ajuntaments, per evitar una centrifugació de la responsabilitat fiscal només a aquestes administracions. Per últim, es crea un nou article 24 bis per atendre una necessitat urgent que ha constituït la principal preocupació de la ciutadania, l'accés a l'habitatge. L'article proposat eximeix de mesures correctives per l'incompliment amb les regles fiscals als ajuntaments que justifiquin que la desviació es deu a la inversió en habitatge públic, amb l'objectiu d'acostar el parc públic d'habitatge de l'Estat a nivells equiparables amb la mitjana d'estats membres de la Unió Europea.

Article primer.

Es deroga la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL).

Article Segon.

Es modifica la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 11, quedant amb el següent redactat:

«3. Excepcionalment, l'Estat i les Comunitats Autònomes podran incórrer en un dèficit estructural en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica greu o situacions d'emergència extraordinària que escapin al control de les Administracions Públiques i perjudiquin considerablement la situació financera o la seva sostenibilitat econòmica o social. Aquesta desviació temporal no pot posar en perill la sostenibilitat fiscal a mitjà termini.

A efectes de l'anterior, la recessió econòmica greu es defineix d'acord amb el disposat per la legislació europea. En qualsevol cas, caldrà que hi hagi una taxa de creixement real anual negativa del Producte Interior Brut, segons els comptes anuals de la comptabilitat nacional.

En aquests casos, caldrà aprovar un pla de reequilibri que permeti la correcció del dèficit estructural, tenint en compte la circumstància excepcional que va originar l'incompliment.

4. Les corporacions locals hauran de mantenir una posició d'equilibri o superàvit Pressupostari. Amb caràcter excepcional, podran incórrer en dèficit en aquells exercicis on hagin tingut lloc emergències derivades de catàstrofes naturals, emergències sanitàries o situacions anàlogues. Els ajuntaments hauran d'aprovar un pla de reequilibri a mitjà termini i hauran de presentar un nivell d'endeutament inferior al 110 % sobre els ingressos corrents.»

2. Es modifiquen els apartats 1, 2, 4 i 5 de l'article 12, quedant amb el següent redactat:

«1. La variació de la despesa neta de l'Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions Locals no podrà superar la taxa de referència del creixement basada en la sostenibilitat del deute de l'economia

espanyola. El compliment amb aquesta taxa de referència es mesurarà de forma plurianual, en línia amb els plans de despesa neta acordats amb les institucions europees.

Aquesta regla no serà aplicable a les corporacions locals que compleixin amb els principis d'estabilitat pressupostària, entesa com el manteniment d'una posició de superàvit o equilibri pressupostari; i sostenibilitat financera, entesa com el manteniment d'un nivell d'endeutament inferior al 110 % dels recursos corrents i el manteniment d'un termini de pagament mitjà a proveïdors a definir reglamentàriament, que reconegui l'estacionalitat d'ingressos segons el tipus de municipi i que contempli un mecanisme d'alerta progressiu.

Quan existeixi una desviació anual de la regla de despesa superior al 0,3 % del PIB anual o del 0,6 % de forma acumulada, el creixement de la despesa neta s'ajustarà a la senda establerta als respectius plans econòmic financers i de reequilibri previstos als articles 21 i 22 d'aquesta llei.

2. S'entendrà per despesa computable als efectes previstos a l'apartat anterior, els usos no financers definits en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, exclosos els interessos del deute, la despesa no discrecional en prestacions per atur, la part de la despesa finançada amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres administracions públiques i les transferències a les comunitats autònomes i a les corporacions locals vinculades als sistemes de finançament. L'import de la formació bruta de capital es corregirà amb la mitjana d'aquest import dels darrers quatre anys.

4. Quan s'aprovin canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla els anys en què s'obtinguin els augments de recaptació podrà augmentar en la quantia equivalent.

Quan s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa computable resultant de l'aplicació de la regla els anys en què es produeixin disminucions de la recaptació haurà de disminuir-se en la quantia equivalent, excepte en els exercicis en què hagi tingut lloc una situació d'emergència fruit de catàstrofes naturals, emergències sanitàries o situacions anàlogues.

5. Els ingressos que s'obtinguin per sobre del previst es destinaran íntegrament a reduir el nivell de deute públic, excepte en aquelles administracions que presentin un nivell d'endeutament per sota del límit legal.»

3. S'afegeix un nou apartat 6 a l'article 12:

«6. Les Corporacions Locals que en l'exercici anterior presentin una situació d'equilibri o superàvit pressupostari i a la vegada compleixin amb els objectius de sostenibilitat financera (deute públic i comercial) i presentin romanent de tresoreria positiu podran efectuar despeses addicionals, per sobre del límit de la regla de despesa, quedant l'increment de despesa limitat al propi compliment de l'estabilitat pressupostària.»

4. Es modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 13, quedant redactat:

«1. El volum de deute públic, definit d'acord amb el Protocol sobre Procediment de dèficit excessiu, del conjunt d'Administracions Públiques no podrà superar el 60 per cent del Producte Interior Brut nacional expressat en termes nominals, o el que s'estableixi per la normativa europea.

Aquest límit es distribuirà d'acord amb els següents percentatges, expressats en termes nominals del Producte Interior Brut nacional: 34,8 per cent per a l'Administració central, 18,6 per cent per al conjunt de Comunitats Autònomes i 6,6 per cent per al conjunt de Corporacions Locals. Si, com a conseqüència de les obligacions derivades de la normativa europea, resultés un límit de deute diferent

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 295-1

12 de diciembre de 2025

Pág. 11

al 60 per cent, el seu repartiment entre Administració central, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals respectarà les proporcions anteriorment exposades.

3. Els límits de deute públic només podran superar-se per les circumstàncies i en els termes previstos a l'article 11.3 i 11.4 d'aquesta Llei.

En aquests casos s'haurà d'aprovar un pla de reequilibri que permeti assolir el límit de deute tenint en compte la circumstància original que va originar l'incompliment.»

5. Es modifica l'article 14, quedant amb el següent redactat:

«Els crèdits pressupostaris per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos a l'estat de les despeses dels seus Pressupostos i no podran ser objecte d'esmena o modificació mentre s'ajustin a les condicions de la Llei d'emissió.

El pagament dels interessos i el capital del deute públic de les Administracions Públiques gaudirà de prioritat absoluta davant de qualsevol altra despesa, excepte en els exercicis en què hagi tingut lloc una situació d'emergència fruit de catàstrofes naturals, emergències sanitàries o situacions anàlogues. També s'exceptuaran aquelles administracions que compleixin amb els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.»

6. Es modifica l'apartat 1 de l'article 15, quedant amb el següent redactat:

«1. El primer semestre de cada any, el Govern, mitjançant acord del Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i prèvia aprovació pel Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i per la Comissió Nacional d'Administració Local en quant al seu àmbit, fixarà els objectius d'estabilitat pressupostària, en termes de capacitat o necessitat de finançament d'acord amb la definició inclosa al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals, i l'objectiu de deute públic referit als tres exercicis següents, tant per al conjunt d'Administracions Públiques com per a cada un dels seus subsectors. Aquests objectius estaran expressats en termes percentuals del Producte Interior Brut nacional nominal. Als efectes de l'anterior, abans de l'1 d'abril cada any el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques convocarà al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i a la Comissió Nacional d'Administració Local, on es debatran i votaran les respectives propostes d'objectius d'estabilitat pressupostària.

L'acord del Consell de Ministres inclourà el límit de despesa no financera del Pressupost de l'Estat al què es refereix l'article 30 d'aquesta Llei.»

7. Es modifica l'article 16, quedant amb el següent redactat:

«Aprovats pel Govern els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic en les condicions establertes a l'article 15 d'aquesta Llei, el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, previ informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, formularà una proposta d'objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per a cada una de les Comunitats Autònomes.

A partir de l'esmentada proposta, el Govern convocarà al Consell de Política Fiscal i Financera de les Comunitats Autònomes i a la Comissió Nacional d'Administració Local en el termini improrrogable de quinze dies per al seu debat i aprovació.»

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Serie B Núm. 295-1

12 de diciembre de 2025

Pág. 12

8. S'afegeix un nou article 24 bis, amb el següent redactat:

«Article 24 bis. *Exempció de les mesures correctives.*

S'eximeix de les mesures correctives establertes per la present secció a les entitats locals que acreditin que la superació dels límits de les regles fiscals deriva d'una despesa d'inversió en construcció, reforma o adquisició d'habitatge públic.»

9. Es modifica l'apartat 1 de l'article 32, quedant amb el següent redactat:

«1. En el supòsit que la liquidació pressupostària es situï en superàvit, aquest import es destinarà, en el cas de l'Estat, Comunitats Autònomes i Corporacions Locals, a reduir el nivell d'endeutament net sempre amb el límit del volum d'endeutament si aquest fos inferior a l'import del superàvit a destinar a la reducció de deute.

Aquesta disposició no serà aplicable a les Corporacions Locals que presentin un nivell d'endeutament inferior al límit legal establert.»

10. Es suprimeix la disposició adicional sisena.

11. Es crea una nova disposició adicional sisena:

«En el període de sis mesos posterior a l'aprovació d'aquesta llei, el Govern aprovarà un projecte de llei de millora del sistema de finançament de les administracions locals, reformant el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquesta reforma tindrà en compte les competències que els ajuntaments assumiran com a resultat de la derogació de la LRSAL, i garantirà l'autonomia local i la suficiència financera d'aquestes administracions.»

cve: BOCG-15-B-295-1